



Estallidos sociales y representación política

Alberto Adrianzén

Analista político y miembro del Comité Editorial de La República

Síntesis: A partir de los hechos ocurridos al interior del país, el autor advierte las consecuencias de esta fragmentación de la protesta o “privatización de las demandas”, producto a su vez de la desigualdad y la pobreza, en la política: la falta de un interés público y la fragmentación de la representación. De allí que, aplicar una política de “mano dura” resulta no sólo un error sino una tragedia política.

Lo que pasó algunos meses atrás en Ilave, luego en San Gabán, al poco tiempo después en Juliaca y, ahora último, en Yurimaguas, todas ellas explosiones sociales, nos plantea una pregunta: ¿cuál es el tipo de sociedad en la que estamos viviendo?. O, mejor dicho, qué tipo de sociedad es la que existe más allá de los linderos de Lima.

La pregunta no es ociosa. Desde hace unos meses el país es conmocionado, cada cierto tiempo, por lo que algunos llaman una “asonada social”. Sin embargo, lo más grave no son sólo estos hechos sino también la incapacidad que tiene el poder y la propia elite política para entender lo que viene sucediendo en nuestro país. Los peruanos no estamos sentados en un volcán (social), como se suele decir, sino más bien en una cadena volcánica siempre lista a estallar de manera fragmentada.

El problema, más allá de la necesidad de imponer una autoridad, es otro. Lo que se tiene, como diría el argentino Edgardo Moca, es un país, sobre todo en el interior, con una enorme potencialidad para la movilización y la agitación social y, al mismo tiempo, con un “pobre capital social, entendido éste como asociatividad estable y reglada”. Ello bloquea la transición democrática, pero también alienta visiones que afirman que no es posible la convivencia democrática debido al bajo nivel de institucionalidad alcanzado y al alto grado de conflictividad social. La receta, por ello, siempre es una para el poder: mano dura y orden, como si el regreso al orden preexistente a la “asonada” y al ejercicio autoritario del poder (que, por lo general, adolece de legitimidad), fuesen suficientes garantías para construir la estabilidad política en el país y hacerlo más gobernable. Lo que sigue es una propuesta para entender lo que nos viene sucediendo, acaso, con la intención ilusa, digo, de salir de este atolladero.

El fin de los intereses, de las identidades colectivas y la pobreza

En verdad, los temas de la pobreza y la desigualdad son, si cabe la expresión, viejos temas en nuestra región. En 1990, el “Informe sobre el desarrollo mundial” del Banco Mundial señalaba lo siguiente: “En ninguna región del mundo en desarrollo los contrastes entre pobreza y riqueza son tan notables (como en América Latina). A pesar de tener ingresos *per cápita* que son en promedio cinco o seis veces mayores que los de Asia Meridional y África al sur del Sahara, casi una quinta parte de la población latinoamericana sigue viviendo en estado de pobreza y esto se debe a un grado extremo excepcionalmente elevado de desigualdad en la distribución del ingreso”. Esta misma apreciación es vuelta a ratificar en el informe del mismo Banco Mundial del año del 2003 sobre América Latina (“Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?”) donde se afirma que esta región es “una de las más desiguales en el mundo”.

No es mi intención en este artículo añadir más datos a lo que seguramente ya se sabe. Sin embargo me interesa mencionar tres: el primero proviene del mismo informe del Banco Mundial del año pasado y muestra que la desigualdad en la distribución del ingreso y en el



consumo en América Latina sigue aumentando en los últimos veinte años si la comparamos con otras regiones del mundo. El segundo, es que más de la mitad de la población en la región andina está por debajo de la línea de la pobreza. El tercero guarda relación con el crecimiento de la informalidad. Según datos de la OIT durante la década de los noventa de cada 10 empleos ocupados, aproximadamente siete han sido informales.

Si bien se puede concluir que uno de los problemas principales de nuestra región es la persistencia y el incremento de la pobreza, la desigualdad y la informalidad, cabe preguntarse por qué esta realidad ya conocida, a diferencia del pasado, genera asonadas, protestas masivas y violentas, grandes crisis políticas y de gobernabilidad que han determinado que algunos presidentes no terminen el periodo para el cual fueron elegidos.

La idea, es que el incremento de la pobreza, la desigualdad y la informalidad hace más difícil la posibilidad de representar políticamente a una sociedad de esas características. Veamos un poco más de cerca de este problema.

Los intereses colectivos —que antes representaban los partidos y daban sentido al intercambio entre los actores del sistema político— han sido reemplazados por lo que llamamos *reclamos privados*, a consecuencia del aumento de la desigualdad y de la persistencia de la crisis económica y política. Me explico: la construcción de un interés público supone un intercambio entre actores y sectores, incluso el sacrificio de algunas de las demandas y la asunción de otras, además de un proceso de intermediación entre estos sectores y el sistema político (y el Estado), que es, justamente, una de las funciones principales de los partidos.

Con los reclamos privados sucede todo lo contrario. No aceptan el intercambio político con otros sectores ni con otros actores para negociar sus demandas —que son segmentadas— y poder así establecer colectivamente un interés mayor y/o público; muchos menos, el sacrificio de sus reclamos. La relación con el sistema y con el Estado es directa. Los que reclaman no aceptan intermediarios, salvo que salga de su propio entorno. Las consecuencias son, por un lado, la multiplicación de las representaciones ya sea a través de listas electorales, micropartidos, etcétera, como hoy sucede en el Perú y en casi toda América Latina; y por otro lado, la construcción de representaciones “espejo” o “sociológicas” al margen de los partidos institucionales. Como dice Maurizio Cotta, son formas de representación de grupos marginales o poco integrados al sistema político (nosotros diríamos de pobres que tienen reclamos) que no sólo tienen necesidad urgente de expresar sus reclamos sino también “de representantes en los cuales, por sus características personales, ellos pueden identificarse y a través de los cuales pueden sentirse *presentes* en la organización política” (en *Diccionario de política*, 2000). Dicho de otra manera, los individuos y/o grupos ni pueden transformar sus reclamos en intereses colectivos ni tampoco pueden dejar sus identidades privadas y construir otra pública (y política), que es una condición para regular los conflictos sociales, crear intereses y representaciones políticas y consolidar la democracia.

En realidad, la permanencia de los reclamos y de las identidades privadas impiden que la demanda social se convierta en una identidad política pública, aspecto importante en todo proceso de consolidación democrática, ya que éstas —las identidades políticas— al expresar los conflictos en una sociedad y al representarlos políticamente pueden ser normadas e institucionalizadas en una democracia. Cuando esto no existe, se tiene no sólo una fragmentación de las protestas y de la representación política sino también una conflictividad social permanente, una suerte de ceremonia del conflicto donde siempre hay



“amigos y enemigos” y no “amigos y adversarios”; grupos con “identidades privadas” que permiten (y legitiman) el regreso de las minorías radicales como hoy viene sucediendo en muchos puntos del país. Una inestabilidad permanente y un país siempre al borde del estallido social; es decir, ingobernable.

En estos contextos, siguiendo a Mauricio Cotta, la representación (política) no ocupa una posición de centralidad, aunque tenga una función más secundaria de legitimación y de corrección del poder. De ahí que no sea extraño que hoy las masas se hayan convertido en lo que podemos definir como “masas plebiscitarias”. Así como ellas ponen al Presidente, así también lo pueden sacar. Pero también que estemos viviendo un ciclo político dominado por los llamados “outsiders” que se inició con Alberto Fujimori y que continúa con Alejandro Toledo.

Por ello, la propuesta de regresar al orden preexistente, antes de la asonada, o de llevar a cabo una política de “mano dura”, no es sólo un error, es una tragedia política. Es no entender lo que viene sucediendo en el país; es repetir un orden (anterior) que es, justamente, el que se rechaza de manera abierta (y radical) y cuya expresión más directa son, justamente, las asonadas sociales de estos últimos meses para horror de la elite política.